

# Economía

## Cambio legislativo

# El sector legal hace un frente común contra la reforma de la ley concursal

*El Gobierno espera ahora los informes del CGPJ y del Consejo de Estado*

**LALO AGUSTINA**  
Barcelona

Dos años después de que se publicara la directiva comunitaria sobre reestructuraciones e insolvencias, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de agosto el anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal para cumplir con la obligación de España de trasponer esa norma. Pero al sector legal no le ha gustado nada la propuesta legislativa que ya está en marcha y muchos están haciendo lo posible por aportar sus ideas al Ejecutivo para cambiar los aspectos que consideran más lesivos.

Abogados, procuradores, auditores, administradores concursales, jueces, patronales, cámaras de comercio y autónomos. Nadie la salva. Todos los colectivos que, de una forma u otra, participan o se ven afectados por la ley concursal están radicalmente en contra de la profunda reforma del texto legal que el Gobierno puso en marcha

**El Ejecutivo privilegia el crédito público, que no se podrá condonar al aplicar la ley de la segunda oportunidad**

**Los profesionales se quejan de que la nueva propuesta ningunea a los administradores concursales y abogados**

ya hace algo más de un mes.

Jesús Sánchez García, vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, resume perfectamente el sentir general: "Como en toda reforma debe hacerse una lectura en positivo, pero hay dos cuestiones que merecen una severa crítica: en el procedimiento de la segunda oportunidad en materia de crédito público no se sigue la doctrina del Supremo ni de la directiva comunitaria que se quiere trasponer; y, en materia de microempresas, se cercena la intervención letrada con las graves consecuencias jurídicas y de tutela judicial efectiva que son imprescindibles".

El primer punto es vital porque ataca directamente a un procedimiento –el de la segunda

oportunidad– que ha tardado seis años en consolidarse y que justo ahora, cuando ya empezaba a cuajar, puede verse seriamente dañado. En efecto, el Gobierno ha decidido que las deudas con la Seguridad Social y Hacienda no puedan recibir el perdón judicial –como el resto de deudas– en aquellos casos en los que un consumidor o empresario de buena fe liquida todos sus bienes y quiere empezar de nuevo de cero.

Junto con este punto, el mundo concursal se ha sorprendido con un aspecto del texto que se ve como un desprecio a los profesionales. "Es preocupante que con la excusa de abaratar costes

y agilizar los procesos, en determinados supuestos se quiera prescindir tanto de la figura del administrador concursal como de la intervención de abogados y procuradores, que cuentan con efectivos Servicios de Justicia gratuita", asegura el procurador Ignacio López Chocarro.

El desacuerdo con estos y otros puntos clave de la reforma se ha plasmado en las decenas de alegaciones que han llegado al Ministerio de Justicia en las últimas semanas y que suponen una enmienda a la totalidad del texto propuesto en el anteproyecto de ley aprobado en agosto. Es tanto lo que hay en juego –una buena ley concursal es clave para aco-

meter los procesos de reestructuración de deudas que son vitales para salvar empresas y puestos de trabajo– que los profesionales obviaron el hecho de que el periodo de audiencia pública para presentar enmiendas se extendiera entre el 5 y el 26 de agosto. No importó.

El anteproyecto unifica los instrumentos preconcursales y regula el *prepack*, una fórmula puesta en práctica desde hace un año que permite salvar empresas con una venta ágil y transparente de la unidad productiva. El nuevo texto legal también establece mecanismos para los procedimientos de insolvencia de las microempresas.

Pero, según Raúl Lorente, socio de LBL Partners y vocal del Registro de Expertos Contables de España, "no se trata de un verdadero proyecto de ley sobre reestructuración empresarial sino de una reforma de la ley concursal en la que se incorpora la parte de reestructuración". En este sentido, Xavier Rafi, letrado de administración de justicia en el juzgado mercantil 9 de Barcelona, echa de menos "haber aprovechado esta ocasión para premiar más la intervención activa de los acreedores durante el procedimiento a la vez que reducir más la intervención judicial en un asunto que básicamente es de orden económico".



Pilar Llop, ministra de Justicia, charla con Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, la semana pasada

---

LUNES, 13 SEPTIEMBRE 2021

---

El Ministerio de Justicia sabe que la ley tiene que estar publicada en el BOE el próximo verano y ahora, tras el aluvión de alegaciones y propuestas recibidas, espera los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Habrà que ver sus aportaciones y las que puedan llegar después, cuando el Gobierno envíe el proyecto de ley a las Cortes antes de fin de año y se reciban también las propuestas de los grupos parlamentarios. Parece difícil que cambie el criterio que hasta ahora se ha impuesto de considerar intocable el crédito público, pero en el resto de materias puede estar todo más abierto, según los expertos.

Con todo, el problema de fondo, que ninguna ley arreglarà ahora ni nunca, seguiría ahí aunque la ley fuera la mejor del mundo. Lo apunta Luis Rodríguez Vega, magistrado de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona: "Por más que se perfeccione la ley con la reforma, no conseguiremos nada si no mejoramos su práctica; eso es lo que falla!".●

